

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **LUIS GERARDO ROJAS VARGAS**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-006-2019-00456-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata el actor, que al comenzar su vida laboral se afilió al extinto ISS hoy COLPENSIONES el 3 de junio de 1976, y posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PROTECCIÓN S.A. en junio de 1994.

Expone que al momento del traslado al RAIS, el asesor de PROTECCIÓN S.A. no le brindó la información debida acerca de las graves consecuencias del traslado, solo le manifestó que en PROTECCIÓN S.A. se pensionaría anticipadamente y con una mesada superior de la que obtendría en el ISS, que el RPM se iba acabar, pero no le realizó proyecciones pensionales, ni le indicó como debía hacer los aportes para cumplir con los beneficios del RAIS, no le suministró información completa y

comprensible, ni le indico que la tasa de remplazo pensional en el RAIS al momento de solicitar la pensión sería inferior a la que obtendría si realizaba el traslado al RPM antes de cumplir los 52 años de edad.

Manifiesta que durante el tiempo de afiliación a PROTECCIÓN S.A., esta solo le brindó una asesoría el 12 de marzo de 2009, cuando solo le faltaban 22 días para cumplir los 52 años de edad, sin proporcionarle una información completa.

Finalmente aduce que solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen, a lo cual dicha entidad responde que no era procedente, debido a que se encontraba a menos de diez años de la edad para pensionarse.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia, despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, luego de concluir que la ineficacia del acto de selección o afiliación a una administradora de pensiones, se da cuando se ha coartado la voluntad del afiliado para decidir afiliarse a determinada entidad y no por la motivación equivocada que se haya tenido para realizar esa afiliación y que además la selección del régimen pensional, implica la aceptación de las condiciones propias del mismo para acceder a la pensión y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

Expone que, en caso de que en el formulario de afiliación aparezca reflejado de manera expresa que la afiliación se realizó de manera libre y sin presiones, pero ello en realidad el afiliado no tuvo esa libertad para hacerla, se configuran en consecuencia los supuestos fácticos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y debe entonces alegarse inicialmente ante el Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa competente, a fin de que este imponga la sanción de Ley y además pierda eficacia el acto de afiliación.

Manifestó que, en el caso del demandante, quedó demostrado que este se trasladó al RAIS porque se le informó que PROTECCIÓN S.A. se pensionaría anticipadamente con un mesada superior a la que obtendría en el ISS, y al ser interrogado en audiencia afirmó que el asesor del fondo privado le indicó que tendría mejor pensión, con ahorros voluntarios y en el futuro salarios más altos, que si tenía más plata era mejor la pensión, por lo que firmó voluntariamente la afiliación, y que ahora quiere trasladarse porque la mesada será mayor en COLPENSIONES, y por tanto en su caso no se cumple el fundamento fáctico del artículo 271 de la Ley 100 de 1993 para que proceda la ineficacia de dicha afiliación, y si bien se demostró en el proceso que la AFP

demandada incumplió con su deber de información o asesoría a un afiliado, ello trae como consecuencia la responsabilidad de la AFP por el perjuicio causado a ese afiliado, responsabilidad que no asumen tales AFP de manera alguna cuando se declara la ineficacia de la afiliación, pero en cambio, sí se traslada al régimen público la obligación de pagar pensiones ya causadas o a punto de causarse, que legal y constitucionalmente no son de su obligación, que por alta que sea la suma que se le devuelva a Colpensiones, esta nunca será suficiente para cubrir una pensión en el RPM, lo que implica el gasto de recursos públicos, que a su vez conlleva a un detrimento de los mismos.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del demandante, argumentando que como la misma juez de instancia indicó, esta se encuentra en línea adversa a lo que ha dicho la CSJ, además la Sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 expresa que para poder predicarse la voluntad tiene que haber voluntariedad del traslado, es decir, información completa respecto de lo que arriesga con tal actuar, pues de no ser así, y brindarse una correcta u omitirse la información relevante se estaría ante un error que vicia la voluntad, por lo que es posible aplicarse la ineficacia por un vicio en el consentimiento denominado, error que hace imposible que la selección del nuevo régimen sea soberana y potestativa.

Por lo que se debe cumplir con lo que dice la jurisprudencia y se debe declarar la ineficacia, pues PROTECCIÓN S.A. no cuenta con soportes de la asesoría o una proyección del cálculo actuarial efectuado al demandante, que pueda demostrar que dicha entidad asesoró al demandante brindándole información que le permitiera establecer un comparativo entre ambos regímenes y así el demandante pudiera tomar la mejor decisión de pertenecer a un régimen u otro.

Finalmente indica que estos procesos de ineficacia por jurisprudencia se invierten la carga de la prueba, y en este caso PROTECCIÓN S.A. solo aporta un formulario de afiliación, y la CSJ en jurisprudencia desde el 2008 ha brindado mayores garantías a las personas que han sido engañadas cuando se trasladaron al RAIS, conforme a la Sentencia 59370 de 2020, SL 373 del 2021 en donde además se ha indicado que el formulario de afiliación no corresponde a un registro o constancia de que el fondo privado hubiere brindado la información correcta.

Por lo que solicita al Tribunal se acoja a la jurisprudencia y se declare la ineficacia del traslado, con sus respectivas condenas.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados del demandante y de COLPENSIONES allegaron escritos de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

Los argumentos que utilizó para dar el fallo de primera instancia del día 13 de mayo del año 2022, están radicalmente opuestos a la jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, sala laboral desde su primera sentencia de este tipo de procesos la S.L. 31989 del 8 de septiembre del año 2.008.

El Fondo pensiones PROTECCIÓN S.A., no suministró al señor **LUIS GERARDO ROJAS VARGAS**, la información correcta, omitió lo relevante y esto evidentemente vicia la voluntad de la demandante en el momento del traslado.

Los fondos privados son entidades con funciones de servicio público a la luz del artículo 48 Superior, se exige de estas un PAPEL ACTIVO en la asesoría que brindan a sus futuros afiliados y más si vienen del Régimen de Prima Media, no en vano el Inciso 3 Literal C Artículo 60 de la Ley 100 de 1993 les impone como OBLIGACIÓN “informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permita la adopción de decisiones informadas”, luego estas entidades deben detallar plenamente y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al RAIS, lo siguiente:

1. Las diferencias de los dos regímenes que existen en Colombia.
2. Las proyecciones de las mesadas por vejez que podrían recibir tanto en el Régimen de Prima Media como en el RAIS y en diferentes estadios.
3. Las implicaciones y conveniencias de optar por uno u otro Régimen.

Al respecto citare las sentencias de la Sala Laboral de la C.S.J. radicados:

33083 del 22 de noviembre del año 2011.

46292 del 3 de septiembre del año 2014.

SL 17595 del 18 de octubre del año 2017.

Ese deber de información a cargo de las administradoras no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 del año 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 del año 1994 exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia dentro de las cuales se entienden la transparencia, la vigilancia y

el deber de información. Ello según lo ha dicho la jurisprudencia a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las que emanan precisamente de la naturaleza del contrato.

De ahí que siendo los fondos privados los que tienen a cargo de asesorar los futuros afiliados en los términos indicados y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto de los servicios que ofrecen, son estos según las reglas que se extraen de las providencias de la Corte Suprema de Justicia los que en el proceso judicial deben de acreditar que la información dada a la persona que se va a trasladar de Régimen satisface las exigencias legales que se ha reparado.

No obra en el expediente prueba relativa a que en su momento el Fondo de Pensiones PROTECCIÓN S.A. hubiese brindado al demandante previó a su traslado toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; Esto es que antes de hacer el traslado le hubiesen indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS dependía del capital consignado en la cuenta individual, tampoco obra prueba que a la fecha del traslado le hayan efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia futuro en ambas opciones, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario y otras tantas observaciones respecto de los riesgos que asumía él referido con su traslado, como por ejemplo recibir una mesada pensional inferior a la que podía haber recibido en el Régimen de Prima Media.

La única prueba que trae el Fondo privado es el formulario de afiliación, y la Corte Suprema de Justicia a dicho en Sentencia de Tutela radicado 59370 del 6 de mayo del 2020 y la SL 373-2021 Sala de Casación Laboral, que el formulario de afiliación, no corresponde a un registro o constancia de que la AFP, hubiese dado información.

De esta manera en atención a los lineamientos jurisprudenciales citados y con sustento en las pruebas, se demuestra que hubo vicio en el consentimiento del señor LUIS GERARDO ROJAS VARGAS, cuando le hicieron el traslado al Fondo privado, traducido en un engaño por la falta “DEL DEBER DE INFORMACIÓN”, en un asunto neutral como lo es el cambio de régimen pensional que la indujo en error de hecho sobre el objeto de que se trata, como lo señala el artículo 1510 del Código Civil.

Por lo que con los argumentos expuestos les solicito de manera respetuosa **REVOQUEN** la sentencia de primera instancia y me ratifico en las pretensiones solicitadas en la demanda:

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

Para la fecha en que el señor LUIS GERARDO ROJAS VARGAS realiza su traslado entre administradoras de fondo, la norma vigente que reguló la materia es el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su versión original.

...

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (3) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

También se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional para la conservación del régimen en los casos de traslado del régimen de Ahorro Individual con solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación definida ha establecido en las sentencias C-789 del 2002, C-1024 del 2004, C-086 del 2016, C-1025 del 2005, el decreto 692 de 1994, el decreto 3995 del 2008, la sentencia SU-062 del 2010, la sentencia SU 130 del 13 de marzo del 2013 y la sentencia SL-373 de 2021.

Así las cosas, descendiendo al caso en concreto del accionante, es claro que el traslado que realizó a la AFP Protección S.A lo hizo conforme a la legislación que regulaba la materia, es decir, el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su versión original por lo tanto se realiza dentro de la legalidad y por lo anterior que mi representada debe ser absuelta y no asumir las consecuencias de actos de terceros.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la omisión en el cumplimiento del deber de información por parte de la AFP PROTECCIÓN S.A. para aceptar el traslado de régimen pensional del actor, genera únicamente que dicha AFP tenga que responder por los perjuicios causados al afiliado como lo sostuvo la juez de primera instancia o si por el contrario, dicha omisión genera ineficacia del traslado del demandante al RAIS, y en caso afirmativo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por el demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo

dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

6. CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión

consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que el actor, estando afiliado al régimen pensional de prima media administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según certificado de SIAFP visible a folio 49 del expediente (Documento 04 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 18 de mayo de 1994 con efectividad a partir del 1º de julio de este mismo año, como se registra en el certificado del SIAFP que milita a folio 49 del expediente (Documento 04 del expediente digital).

De otra parte, en este caso, si bien el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 40 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1994 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por el demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:12:15 del video de la audiencia de trámite y juzgamiento (Documento 13 del expediente digital), no se advierte que este haya confesado que AFP PROTECCIÓN S.A. le hubiese brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se

requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, si bien el demandante confesó en su interrogatorio de parte que firmó voluntariamente el formulario de afiliación al RAIS, lo cierto es que la carga probatoria que en este caso debía cumplir PROTECCIÓN S.A. era que había cumplido con el deber de información necesaria para lograr en la demandante un consentimiento debidamente informado, conforme a las normas vigentes para el año 1994, sin embargo, contrario a lo manifestado por la *a quo*, para probar la debida asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual, como bien lo concluyó la *a quo* y como se afirma en el recurso, no probó la AFP PROTECCIÓN S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada.

Ahora, contrario a lo concluido por la juez de primera instancia, ha sido clara la jurisprudencia de la SCL de la CSJ, respecto a que la consecuencia del incumplimiento del deber de información por parte de las AFP es la declaratoria de la ineficacia de dicho acto jurídico de afiliación y por ende, que la persona continua válidamente afiliada al régimen pensional al cual se encontraba afiliado previo al traslado, y no como se afirma en la sentencia recurrida, la validez de la afiliación con la carga de responder patrimonialmente por los perjuicios causados al afiliado, por lo que se revocará la decisión absolutoria de primera instancia, para en su lugar declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por el demandante en el año 1994 del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP PROTECCIÓN S.A., disponiendo su retorno al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad, conforme a la pacífica y reiterada línea jurisprudencial desarrollada por la SCL de la CSJ.

Ahora bien, en cuanto a la pretensión de ordenar a PROTECCIÓN S.A. devolver a Colpensiones la totalidad de aportes realizados por el demandante durante su paso por el RAIS con sus intereses y rendimientos financieros, tal pretensión resulta procedente dado que, al declararse en este proceso la ineficacia del acto de traslado,

el mismo nunca existió, por lo que es claro que ningún efecto jurídico puede derivarse de este y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido PROTECCIÓN S.A. como producto de las cotizaciones del demandante, es decir, el 100% de las cotizaciones, con sus respectivos intereses o rendimientos financieros, sin descuento de ninguna índole, incluyendo además en dicha devolución los porcentajes que en su momento fueron descontados de la cotización y que fueron destinados al pago de comisiones de administración, pago de primas de seguros previsionales, reaseguro Fogafín y fondo de garantía de pensión mínima, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada será REVOCADA y en su lugar se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos anteriormente expuestos.

Las COSTAS en ambas instancias correrán a cargo de PROTECCIÓN S.A. por haber sido vencida en el juicio. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000. a cargo de PROTECCIÓN S.A.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: **REVOCAR** la sentencia del 13 de mayo de 2022 proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **LUIS GERARDO ROJAS VARGAS** contra **COLPENSIONES**, y **PROTECCIÓN S.A.**, para en su lugar:

1. **DECLARAR** la INEFICACIA del traslado efectuado en el año 1994 por el señor LUIS GERARDO ROJAS VARGAS, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A.
2. **CONDENAR** a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a devolver a COLPENSIONES la totalidad de las sumas que hubiese recibido como producto de las cotizaciones realizadas por el demandante durante su permanencia en el RAIS, con sus respectivos intereses, incluyendo los porcentajes descontados de la cotización destinados al pago de comisiones de administración, pago de primas de seguros previsionales, reaseguro Fogafín y fondo de garantía de pensión mínima, es decir, el 100% de las cotizaciones.
3. **ORDENAR** a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, reactivar de manera inmediata la afiliación del demandante al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad y además a recibir la devolución de los dineros ordenada en este proveído y regístralos en su historia laboral.
4. **DECLARAR** no probada las excepciones propuesta por las demandadas.

SEGUNDO: COSTAS en ambas instancias a favor del demandante y a cargo de PROTECCIÓN S.A. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000. Las costas de primera instancia serán fijadas por la *a quo*.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **604e7dcaddc6786ce4d39cba07effaa624a8fc65632388592fc016c557c1cfb7**

Documento generado en 20/04/2023 02:21:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>